

## UN PROCESO DEMOCRATICO IMPOSIBLE

Los acontecimientos de las últimas semanas (septiembre y primera quincena de octubre) han probado una vez más que el proceso de democratización y, en definitiva, la paz no es posible mientras no sea controlado el aparato represivo heredado de los regímenes anteriores. Los grupos militares que están detrás de él lo manejan a su antojo; y mientras ambas cosas permanezcan la paz no será posible en el país porque su proyecto político fundamental consiste en mantener las estructuras sociales injustas aun a costa de reprimir las justas demandas del pueblo desesperado y hambriento. Estas fuerzas represivas y oscurantistas están en contra del diálogo, de las reivindicaciones laborales, de las organizaciones populares independientes, de la libre expresión del pensamiento y de las reformas, en especial de la reforma agraria. Consecuentemente, están en contra de unas elecciones libres donde la oposición pudiera participar en igualdad de condiciones que los demás partidos de derecha. Todo esto no hace más que distanciar la paz y dificultar aun más cualquier solución política. Y así, ningún tipo de elecciones darán con la solución al actual conflicto mientras no cesen de operar de modo definitivo estos grupos tan próximos a los cuerpos de seguridad.

Cumpliendo sus amenazas, lanzadas a principios del mes de septiembre, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) ajustició sumariamente a un supuesto comandante del ERP, al secretario general de la FUSS y a tres personas más. A los cuatro últimos los acusó de ser miembros del partido comunista. Antes de ajusticiarlos les obligó a confesar sus afiliaciones izquierdistas en un video que luego fue exhibido por la televisión. En el largo comunicado en el que justifica su acción, el ESA señala una larga lista de supuestos contactos de los cuatro ajusticiados entre los cuales se incluían al arzobispo, dos diplomáticos y a varias personalidades políticas y universitarias.

En otra serie de acciones, el ESA se responsabilizó del secuestro de un alto funcionario del ministerio de relaciones exteriores a quien amenazó con ajusticiar sumariamente bajo la acusación de ser miembro del partido comunista. Igual suerte han corrido el encargado del departamento de relaciones internacionales de la facultad de jurisprudencia y un docente de relaciones internacionales de la Universidad de El Salvador, a los cuales se suma un largo etcétera de estudiantes universitarios de dicho centro de estudios y de otras universidades privadas. El secretario de la facultad de ingeniería de la Universidad de El Salvador fue muerto en forma violenta no aclarada.

En el capítulo de la dinamita el ESA se atribuyó la bomba que dañó las oficinas de dos radiodifusoras por no dar publicidad a sus comunicados y la que destruyó una imprenta en el centro de la capital, la cual supuestamente pertenecía al partido comunista. A consecuencia de la explosión se desató un incendio que consumió dos casas vecinas a la imprenta. En breve, esta ha sido la campaña por la paz y la democracia que el ESA ha lanzado a partir del 6 de septiembre.

Varias radiodifusoras decidieron suspender sus noticieros y toda información sobre grupos políticos al recibir amenazas de muerte de un tal Ejército Anticomunista Salvadoreño (EAS). El EAS exigió no dar cabida en ningún campo pagado a los comunicados de los sindicatos ni de ningún otro grupo comunista, incluida la democracia cristiana. Otro grupo, el Comando Nacionalista Salvadoreño ha exigido, bajo amenazas drásticas, que sea retirado de un colegio católico privado de la capital un cancionero que contiene letras de canciones marxistas leninistas.

Todas estas acciones han sido condenadas fuertemente ("incalificables acciones," "actos irresponsables", "actitud antipatriótica,") por

los partidos políticos, la comisión política del pacto de Apaneca, la Iglesia, la embajada norteamericana y la misma Casa Blanca. Incluso el ministerio de defensa condenó escuetamente la violencia viniera de donde viniera y afirmó estar haciendo los esfuerzos a su alcance para descubrir a los culpables. En algunos de estos comunicados se espera que las investigaciones de las autoridades logren identificar a los responsables y los lleven a los tribunales. Sin embargo, el presidente Magaña ha guardado silencio y ni siquiera ha pronunciado la resobada fórmula de que ordenaría una exhaustiva investigación. Asimismo el ministro de relaciones exteriores ha seguido el ejemplo del presidente, mientras la embajada norteamericana salía a defender al funcionario salvadoreño. La comisión oficial de derechos humanos, tan activa en los meses anteriores, también ha acompañado al presidente en su silencio.

Por si esta ola de violencia protagonizada por la derecha no fuera suficiente, el 25 de septiembre la Fuerza Armada bombardeó a la población civil de Tenancingo en un desesperado intento por desalojar al FMLN quien se había apoderado de dicha localidad desde hacía tres días, impidiendo al ejército retomarla bajo su control. Las emisoras internacionales, incluida La Voz de América, difundieron la noticia, inculcable además por haber sido filmada en directo por equipos de televisión. Las emisoras locales ofrecieron entrevistas con las víctimas sobrevivientes, quienes insistieron que "había sido el avión." Esto provocó la ira de los voceros oficiales del ejército. La cantidad de muertos entre la población civil ha sido elevada, fuentes independientes hablan de 100 muertos, sobre todo ancianos, mujeres y niños. Tenancingo, una población próxima a la capital, con varios miles de habitantes es ahora una ciudad desierta con unas 300 personas atendidas por la Iglesia. El resto de sus habitantes sobrevivientes ha pasado a engrosar la categoría de los miles de desplazados. En Tenancingo el gobierno se preparaba para iniciar su programa de repoblación de áreas y de reconstrucción. Ciertamente ha sido un desafortunado comienzo.

Este bombardeo indiscriminado de la población civil recuerda los horrores de los bombardeos de Somoza, los cuales, por cierto, han sido rápidamente olvidados por los funcionarios norteamericanos adalides de la democracia y la libertad. El gobierno no ha dado ninguna explicación

oficial. El COPREFA ha tergiversado y falseado los hechos culpando al FMLN de haber convertido a Tenancingo en una ciudad mártir. La embajada norteamericana está nerviosa, y con sobrada razón, porque no es fácil vender al pueblo norteamericano una guerra cuando ven en sus pantallas de televisión cómo sus impuestos se utilizan para castigar cruelmente a la población civil indefensa. Para que no quedara duda alguna de los hechos, Radio Venceremos, ofreció una grabación en la que se escucha el diálogo entre el piloto de uno de los aviones y el comandante del operativo de limpieza. Al preguntar el piloto qué hacer en el área urbana, el comandante respondió friamente que "todo lo que está parado es enemigo." Todo lo que no era Fuerza Armada fue declarado enemigo y, por tanto, bombardeado. El bombardeo fue tan indiscriminado que causó bajas en las filas de la misma Fuerza Armada.

Si la guerra se conduce con tan pocos escrúpulos, menores aún son los escrúpulos para secuestrar, capturar ilegalmente y hacer desaparecer reales o supuestos opositores políticos. Todos estos atropellos permanecen en el anonimato o, lo que es lo mismo, respaldados por agrupaciones clandestinas; hasta ahora ninguna investigación ha sido lo suficientemente exhaustiva como para identificar a los responsables y llevarlos ante los tribunales.



Con un poco de retraso, los medios gubernamentales norteamericanos han reconocido oficial y públicamente la gravedad de la situación de los derechos humanos. La Voz de América se ha apresurado a culpar de la actual ola de terror a los escuadrones de la muerte en un intento de disculpar a los cuerpos de seguridad. Pero para ello debió hacer una bizarra afirmación, los escuadrones de la muerte son los responsables del 80% de los 40 mil asesinatos políticos ocurridos hasta ahora. Esto significa que dichos escuadrones han asesinado por lo menos a 32 mil salvadoreños, una cifra escalofriante que demuestra que no ha sido el FDR-FMLN quien ha estado violando masivamente los derechos humanos. Pero aquí surge la pregunta de cómo es posible esta impunidad sin connivencia con los cuerpos de seguridad, tal como lo han denunciado el Socorro Jurídico, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y tal como lo sugiere el hecho de que algunos de los desaparecidos hayan aparecido en las cárceles de los cuerpos de seguridad. Y si no existe una connivencia, cuán grande es la incapacidad del gobierno para controlarlos, a pesar de tanta promesa para esforzarse en ello y de tanta buena palabra de los funcionarios norteamericanos.

Las investigaciones de la comisión Kissinger, sin embargo, apuntan a que efectivamente existe esa connivencia entre los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad. Según declaraciones de Kissinger a su regreso a Estados Unidos, D'Aubuisson le informó de que los escuadrones de la muerte estaban relacionados con los cuerpos de seguridad. Por su parte, la comisión ha declarado estar consternada por la impunidad con la que actúan estos grupos y por el volumen de sus actuaciones. En este sentido, Kissinger dejó claro al presidente y a los altos mandos de la Fuerza Armada que su gobierno no desea tener que escoger entre su seguridad y los derechos humanos, aunque se encuentra comprometido firmemente en la lucha contra el marxismo leninismo. El tiempo dirá si las declaraciones de Kissinger se quedan en eso, en simples declaraciones de un funcionario norteamericano, o se traducen en una política firme que acabe de una vez por todas con estas actividades terroristas condenadas por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

S.J.

